

En el ámbito internacional, el año 2008 se ha caracterizado por el estallido de una «crisis», que aunque anunciada por distintos sectores científicos, sociales y políticos, a estas alturas, todavía se sigue denominando, como la «crisis sorpresa».

Parece que lo sucedido está ya bastante claro. Existe un amplio acuerdo en torno a la explicación de las causas inmediatas de la actual crisis mundial, su origen en el negocio de las hipotecas *subprime* (o de alto riesgo) y en el sistema bancario estadounidense y los instrumentos financieros que han favorecido la contaminación progresiva del conjunto de la economía mundial.

Sin embargo, de forma más profunda, se confirma el papel central jugado por la ideología y las políticas ultraliberales en la escasa y mala regulación y en el mínimo control ejercido por los órganos competentes sobre las entidades y operaciones financieras que han favorecido la gestación y expansión mundial de la crisis. Posteriormente, tras la transformación de la crisis hipotecaria y bancaria estadounidense en crisis financiera global, la abrupta ruptura funcional con los principios ultraliberales (el proverbial pragmatismo político de los poderosos) ha abierto la puerta a la intervención de los estados para salvar a los bancos y a los mercados de crédito y tratar de que la inevitable y, en cualquiera de los posibles escenarios, dura recesión económica por venir tenga la menor intensidad y duración posibles.

Los últimos datos indican que Japón y el conjunto de los países de la eurozona ya han entrado en recesión y que a principio de 2009, también EEUU y España, entre otros, presentarán dos trimestres seguidos de crecimiento negativo del PIB.

Desde hace tiempo el movimiento ecologista viene argumentando que un «crecimiento» como el que estábamos viviendo en la última década era no sólo imposible de sostener, sino perjudicial para el planeta. De esta forma, para una gran parte del ecologismo, los tímidos y escasos avances en la concienciación ambiental y en las políticas puestas en práctica no guardan relación con la gravedad del problema que tenemos delante. Se sigue sin afrontar el elemento central del «problema» desde hace varias décadas: el conflicto básico entre, por un lado, un planeta Tierra con recursos limitados y finitos y, por otro, un capitalismo globalizado, basado en la necesidad de crecimiento y acumulación constantes, que produce un consumo energético al alza, y se ancla en la idea de crecimiento «sin fin».

Ecologismo y medio ambiente en 2008, el año de la «crisis» y el decrecimiento

Escrito por Heriberto Dávila Ojeda*

Jueves, 13 de Marzo de 2008 12:08 - Actualizado Miércoles, 16 de Marzo de 2011 18:34

Todo esto ha llevado a una de las mayores organizaciones ecologistas de nuestro país a sacar como estandarte la compleja idea y el complicado término de «decrecimiento», en un Manifiesto que aprobaron con más de 200 ecologistas de todo el Estado español, en Valencia en diciembre, en el que se decían algunas polémicas ideas como esta:

Ecologistas en Acción considera que decrecer en el gasto global de energía y materiales, así como en la generación de residuos no es simplemente una opción, es una necesidad que impone un planeta con recursos limitados. Obviamente, quien puede decrecer es quien gasta de forma mayoritaria los recursos y genera los residuos, es decir, los países más enriquecidos.

En esta reducción de presión sobre los bienes naturales y los sumideros del planeta, la tecnología y la ecoeficiencia podrían jugar un papel importante. Sin embargo, siendo ambas necesarias, no son suficientes. Los ejemplos de aumentos de gasto de materia y energía asociados a la mejora de la eficiencia y al progreso tecnológico son numerosos: medios de transporte más modernos y eficientes permiten el incremento de las distancias que se recorren; el desarrollo de la electrónica crea miles de nuevos productos que se consumen en masa; el ahorro en combustible de coches que consumen menos queda anulado ante el aumento de la cantidad de coches.

Por tanto, a la ecoeficiencia le tenemos que añadir una reducción significativa. Si las personas queremos llevar una vida decente en el futuro, en un entorno sin violencia y en condiciones de equidad, tenemos que preguntarnos cómo reconducir el estilo de vida, de producción, de consumo, de transporte, de ocupación del territorio, de concentración de poder, hacia la sostenibilidad... Un horizonte de sostenibilidad ambiental y justicia social requiere acciones, no sólo técnicas, sino fundamentalmente políticas que suponen cambios radicales.

Para comenzar este camino es necesario realizar una revisión de nuestros valores: primar la cooperación ante la competencia, la solidaridad ante el egoísmo; adaptar las estructuras económicas y productivas al cambio de valores; ajustar la producción y el consumo esencialmente a escala local; revitalizar los mundos rurales; reducir la movilidad motorizada; redistribuir con criterios ecológicos y de equidad el acceso a recursos naturales y las riquezas; limitar el consumo a las capacidades de la biosfera; basar nuestro consumo energético en el sol; tender hacia bienes que duren, que se puedan reutilizar, reparar y conservar; y reciclar en todas nuestras actividades.

Esto no puede ocurrir sin un replanteamiento del concepto de trabajo, de manera que sirva

realmente para cubrir necesidades y que incluya lo productivo y lo reproductivo, para que, primando siempre aquellas tareas que cuidan la vida, pueda ser repartido por igual entre tod@s.

Ecologistas en Acción considera que si la actual crisis fue causada por el ser humano, corresponde y es la facultad de la humanidad ser artífice de las soluciones. El gran reto del decrecimiento en los países enriquecidos es aprender a producir valor, libertad y felicidad reduciendo significativamente la utilización de materia y energía, así como los desechos. Se trata de aprender a vivir mejor con menos para poder pasar de una cultura de guerra con los territorios y el conjunto de los seres vivos a una cultura de paz que permita construir otra forma de estar en el mundo. En este empeño nos reafirmamos y volvemos a encontrar el motivo de nuestra unión diez años después.

Parece evidente que en este año de «crisis total» en el que entramos este va a resultar un debate algo más que teórico, como demuestran las numerosas protestas sociales que están saliendo a la luz en los últimos meses, en países como Francia o Alemania.

A nivel internacional ha sido importante también que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) asumiera que el desarrollo económico, basado en un crecimiento ilimitado, conduce a una explotación irracional de los recursos naturales y provoca la pérdida de biodiversidad. Por ello el Programa 2009-2012 de la UICN incluye ahora la necesidad de cambiar de modelo energético basado en la reducción del consumo y la producción de energía en los países ricos, sin olvidar un reparto equitativo y sostenible del consumo energético para todos los habitantes del planeta.

La Asamblea de Miembros de la UICN aprobó en octubre que el Programa de la UICN 2009-2012 «Forjando un futuro sostenible» concediera por primera vez una especial importancia a la lucha contra el cambio climático y a implementar sistemas energéticos ecológicamente sostenibles equitativos y eficientes. Además la Asamblea pidió a los miembros de la UICN que integren en la totalidad de sus programas la lucha contra el cambio climático como una prioridad para evitar la pérdida de biodiversidad y asegurar la integridad de los ecosistemas.

Con esta Asamblea, por primera vez en la historia, la UICN, organización mundial líder en la conservación de la naturaleza, incluye que las políticas y prácticas para la mitigación del cambio climático se llevarán a cabo en paralelo a los esfuerzos contra la deforestación y otros

procesos de pérdida de biodiversidad, así como el apoyo a un modelo comercial que incentive los intercambios en clave de cercanía y el consumo de bienes y servicios producidos localmente, y que incorpore los costes ambientales y sociales de la larga distancia.

A nivel estatal, el nuevo gobierno de Zapatero, no sólo no ha respondido a las esperanzas que suscitaron algunas de las cuestiones positivas que se habían realizado en la anterior legislatura, sino que parece que se confirma una apuesta decidida por el «desarrollismo», ya que en primavera se conforma un nuevo Gobierno central del PSOE, marcado por la fusión de los ministerios de Medio Ambiente, y de Agricultura y Pesca.

Desde el principio, organizaciones como Ecologistas en Acción, denunció lo que posteriormente se ha confirmado con los hechos: un claro giro antiambientalista por parte del gobierno Rodríguez Zapatero. ^[1] El presidente unificó las competencias de medio ambiente, agricultura y pesca, quitando prioridad al avance hacia la sostenibilidad. El Ministerio de Medio Ambiente fue el que mejor funcionó en el anterior Gobierno, pese a sus limitaciones. De este modo, al vincularlo al antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, que se ha caracterizado históricamente por apoyar las políticas más productivistas e insostenibles, José Luis Rodríguez Zapatero demostró por la vía de los hechos su desprecio por acometer el necesario tránsito hacia la sostenibilidad.

El presidente del Gobierno pasó de coquetear con la creación de una vice-presidencia de sostenibilidad, a diluir el Ministerio de Medio Ambiente. Esto, unido a lo que expresó en el debate de investidura (su apuesta por las grandes infraestructuras de transporte, la gestión insostenible del agua, la falta de ambición en políticas de reducción del consumo energético o la apuesta por internacionalizar más la economía española) dibujaron un inicio de legislatura obsesionado por el crecimiento económico, sin capacidad para entender que estas miras cortoplacistas nos sumergen aún más en una fortísima crisis ambiental. Un Gobierno que practica el lavado verde de imagen pero no la sostenibilidad y al que la actual crisis económica no hace más que ayudar en esta línea.

Se ha plasmado a lo largo de este año 2008 una clara ausencia de lucha contra el cambio climático del Gobierno. Es más, su empeño parece dirigirse en incrementarlo, ya que las emisiones del Estado español en 2007 han vuelto a subir situándose entre un 51 y 52% por encima de las de 1990. El Gobierno no sólo ha seguido repartiendo gratuitamente los derechos de emisión, sino que mantiene y acelera, con la excusa de la crisis, la puesta en marcha de los proyectos más insostenibles del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), paradigma de la insostenibilidad, que está suponiendo la construcción de 6.000 km de autovías adicionales. Miles de kilómetros de autovías y líneas de alta velocidad ferroviaria, proyectos

muy destructores del entorno y poco generadores de empleo, para los que en 2009 se incrementará el presupuesto en un 7,5%, superando así los 19.000 millones de euros. ^[2] De esta forma, organizaciones tan importantes como Greenpeace, comentaban a final del 2008, que España continúa siendo el país que más se aleja de Kioto, pero todavía peor, que el gobierno español ha sido de los que más ha presionado para debilitar algunos contenidos fundamentales del paquete energético europeo y de la Directiva de reducción de emisiones de los vehículos.

Bajo este prisma, también se situó la celebración en Madrid del Congreso Mundial del Petróleo, que ejemplificó el respaldo del Gobierno a este obsoleto y destructivo combustible. En este Congreso, el XIX Congreso, se demostró el desinterés de las petroleras por asumir su papel dentro de la crisis medioambiental y el sufrimiento social que conlleva la persecución de sus intereses económicos. Hacer cara a los problemas climáticos y a los daños sociales que conlleva el petróleo de sobra conocidos por la ciudadanía no es un tema presente en la agenda de las petroleras. Por ello este XIX Congreso no ha sido tanto una oportunidad perdida en la búsqueda de nuevos modelos energéticos en un mundo cautivo por el petróleo sino la constatación clara y evidente de que los intereses de las multinacionales van a continuar siendo la persecución de los beneficios económicos. Por eso la lección que sale de este XIX Congreso debe hacernos reflexionar sobre cómo las multinacionales energéticas consiguen adecuar su identidad a nuevos tiempos. Así usan estrategias que llevan el sello de la sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa (RSC) sin que ello suponga una transformación real de sus negativas prácticas que tanto conocemos. Hay que decir que la celebración de este Congreso en Madrid movilizó a muchas organizaciones ciudadanas, con una manifestación celebrada en el centro de Madrid que congregó a más de mil personas bajo el lema «No más sangre por petróleo».

El problema energético no está únicamente en la opción del Gobierno (y la mayor parte de la oposición) por los combustibles fósiles, está también en que no termina que poner en marcha una política de cierre de las centrales nucleares. Esto es especialmente sangrante en un año como el que se cierra, plagado de incidentes, especialmente en las centrales catalanas. De esta forma, y con motivo de estos accidentes, la organización Ecologistas en Acción, denunciaba en septiembre que la nueva avería de Ascó era un indicio de que la empresa ANAV es incapaz de gestionar con seguridad las tres centrales nucleares que tiene a su cargo, solicitando del CSN y del Ministerio de Industria que suspendan los permisos de las centrales, Ascó I-II y Vandellós II. A esta denuncia del «modelo nuclear español» se unía Greenpeace, cuando de forma espectacular, algunos de sus activistas elevaron un globo aerostático demandando el cierre de la central nuclear de Garoña. Parece, sin duda, un verdadero peligro que estas tres centrales nucleares estén en manos de una empresa incapaz de mantenerlas en funcionamiento sin incidentes. La fuga de aceite de la turbina de Ascó I, se suma al cúmulo de incidentes de dicha central, que incluyen una fuga radiactiva al exterior conocida y ocultada por los explotadores de la central.

Por otra parte, la política de aguas vuelve a poner las miras en los trasvases (Ebro a Barcelona o Valdecañas al Segura), haciendo caso omiso de la continua reducción de los recursos hídricos existentes en nuestro estado (disminuyeron un 15% en el período 1996-2005) y de la pérdida de calidad de los mismos (como lo atestigua el informe sobre calidad de las aguas de baño elaborado por Ecologistas en Acción). [\[3\]](#)

Al analizar el estado de la biodiversidad, el panorama es desolador. En él se aprecia que los ecosistemas españoles nunca estuvieron tan protegidos pero, sin embargo, nunca se perdió diversidad biológica a mayor velocidad. Probablemente uno de los ejemplos más palmarios y denunciados por distintas organizaciones ecologistas, a través de una activa campaña, es el atún rojo, al cual el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino no quiere otorgar los niveles de protección que necesita. [\[4\]](#)

En cuanto a las movilizaciones y luchas a nivel más local, hay que destacar un año más al movimiento ecologista de Canarias, donde se ha desarrollado nuevamente una Iniciativa Legislativa Popular, [\[5\]](#) con la presentación de más de 45.000 firmas ante el Parlamento de Canarias. El sector servicios supone el 80% del producto interior bruto del archipiélago, destacando especialmente el turismo. Estos años había descendido la llegada de turistas por diversos factores, lo que unido al declive del sector genera la disminución de los precios y el impulso de fenómenos como el «todo incluido».

Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias creyeron que las islas precisaban una política de fomento a la renovación de la planta alojativa obsoleta, y la defensa de un crecimiento cero que impida que la industria turística ocupe nuevos territorios costeros vírgenes. Los objetivos eran generar el mayor apoyo social posible para llevar esta Iniciativa ante el Parlamento e impulsar un proceso de participación social en el archipiélago. Esta campaña unitaria por un «Turismo sostenible» no tenía parangón anterior, ya que nunca se había presentado una ILP de un tema general y global, sino de temas más locales. Tras conseguir las 45.000 frmas, esta organización ecologista expuso sus razones en el Parlamento, y los grupos parlamentarios que mantienen al actual gobierno de Canarias (CC-PP) no se dignaron ni a admitirla a trámite y «tiraron» a la basura las frmas de 45.000 canarios, con la consecuencia de una gran polémica en la sociedad.

Otra lucha local destacada, aunque tenga una clara raíz global, es la movilización contra la instalación de una refinería en Tierra de Barros (Badajoz). Las cinco organizaciones ecologistas más importantes de ámbito estatal (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena) declararon su firme oposición al proyecto de refinería del grupo Gallardo en Badajoz, al que han calificado de «auténtico despropósito medioambiental». En Tierra de Barros el Grupo Gallardo, con el apoyo de la Junta de Extremadura y el visto bueno del Ministerio de Industria, quiere construir una refinería. No sólo las organizaciones ecologistas califican este proyecto como un despropósito desde múltiples puntos de vista, sino que ha surgido en este año un fuerte proceso de movilización contrario a este proyecto.

En primer lugar, esta refinería tendrá nefastas consecuencias para el medio ambiente y la salud de las personas, principalmente por la emisión de partículas en suspensión. Esto implica que, en lugar de revitalizar la economía local, la va a perjudicar gravemente, ya que la agricultura se verá severamente afectada y ésta es la actividad principal de la comarca. A esto hay que añadir las emisiones de CO₂ de la refinería, que contribuirán al incremento del calentamiento global. La refinería no sólo generaría una mayor cantidad de combustible para el transporte, sino que, en sí misma, es un potente generador de gases de efecto invernadero, lo que en definitiva supone abundar todavía más en el incumplimiento reiterado de España en sus compromisos de lucha contra el cambio climático de acuerdo con el Protocolo de Kioto.

Por otra parte, el citado proyecto contempla la construcción de un oleoducto y un poliducto desde Huelva a los Santos de Maimona (Badajoz). En total, más de 500 kilómetros de tuberías, que junto al resto de instalaciones afectarían a 14 espacios naturales protegidos por la Unión Europea, además de generar un impacto directo sobre el Parque Nacional de Doñana, introduciendo un riesgo de vertido inasumible para infinidad de hábitats y cauces. Además, el proyecto prevé un consumo de 4 hm³/año de agua en una tierra como Extremadura, con unos recursos hídricos muy limitados. Esto podría suponer que el abastecimiento a la población peligrase en las épocas de sequía. Incluso la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha reconocido el riesgo de vertidos a las aguas del río Guadiana, ya gravemente contaminado.

Son incontables la cantidad de pequeñas campañas y acciones que a lo largo de todo el 2008 han continuado sembrando las semillas del cambio ecológico entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país; las movilizaciones contra la carretera 501 en Madrid, las actividades de sensibilización a favor de un consumo más responsable y de educación ambiental, la lucha contra el Tren de Alta Velocidad en Euskal Herria con movilizaciones multitudinarias y medidas del todo desproporcionadas de la administración vasca y central, la defensa del cierre de las nucleares españolas, como Garoña, contra el grave peligro que la mina de Las Cruces supone para el estuario del Guadalquivir (Sevilla), contra el proyecto de central térmica de Mequi-nenza (Aragón) y un largo etcétera.

Probablemente, de las pocas alegrías que ha tenido el ecologismo español este año son las relacionadas con que la crisis ha ralentizado algunos de los procesos de destrucción más fuertes que estaban produciéndose, como el urbanístico o el consumista. Obviamente la crisis no es solución, pero sí puede significar una oportunidad para cambiar, para olvidar la obsesión por el crecimiento y aprender que necesitamos «menos para vivir mejor», como reza el lema aprobado por Ecologistas en Acción en 2008, en su décimo aniversario. Esperamos que así sea.

* Heriberto Dávila es historiador y miembro del Consejo Federal de Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias.

[1] No sólo Ecologistas en Acción, sino Greenpeace, opina algo similar como se puede verificar en estas declaraciones de Juan López de Uralde, director de Greenpeace: «Este ha sido un año perdido para el medio ambiente. Demandamos a José Luis Rodríguez Zapatero un giro de 180 grados en su política, y que el medio ambiente recupere un papel central en su acción de gobierno».

[2] En relación a esta cuestión, la propuesta de agilizar las declaraciones de impacto ambiental haciendo que pasen de unos 600 días de media a unos 200 o 300 es tremendamente negativa, ya que va a significar que la participación pública se verá dificultada. Lo que se busca es obtener más declaraciones de impacto ambiental positivas en menos tiempo, para agilizar la obra pública.

[3] El informe sobre aguas de baño continentales de 2008 de Ecologistas en Acción pone en evidencia las verdaderas causas de la descatalogación, y por lo tanto de la eliminación de la vigilancia y el cuidado de estas zonas. Tras el estudio realizado, se ha concluido que la pérdida de las condiciones naturales y sanitarias óptimas se deben a los vertidos de aguas residuales sin depurar, a la contaminación por productos fitosanitarios de la actividad agrícola cercana a ríos y embalses, a las construcciones en dominio público hidráulico, a la excesiva presencia de bañistas y a las infraestructuras de regulación. También Greenpeace hizo pública una crítica al Gobierno en este sentido: «Al poner encima de la mesa el proyecto de un nuevo trasvase desde el tajo al Segura, desde su curso bajo, el gobierno reabre un tema que se había cerrado definitivamente: el de los trasvases».

[4] Otro ejemplo paradigmático, es como a pesar de haber varios informes científicos reclamando mayor protección para los sebales canarios (*Cymodocea nodosa*), el Gobierno de Canarias quiere rebajar su protección y descatalogarlo como hábitat en peligro.

[5] El movimiento ecologista de Canarias es sin duda el más «promiscuo» del estado en lo que se refiere a la utilización de esta herramienta de participación ciudadana, que esta reglada para el ámbito autonómico y el estatal, y que en este archipiélago ha hecho que el ecologismo esté «presente» en el Parlamento de Canarias con sus propuestas nada más y nada menos que 5 veces en la última década.